

Colombia

En Colombia, el Centro de Solidaridad trabaja con sindicatos y grupos comunitarios para proteger la libertad de asociación, terminar con la subcontratación laboral y promover la inclusión de las mujeres y los trabajadores afrodescendientes.

Después de más de cinco décadas de conflicto civil, Colombia se encuentra en una coyuntura crítica. El gobierno está en conversaciones de paz con el grupo armado de izquierda más grande del país y también está convirtiéndose en un actor fuerte de la región, después de varios años de fuerte crecimiento económico.

Sin embargo, a medida que el país trabaja para inculcar el estado de derecho y el acceso a la justicia, los abusos contra los derechos humanos siguen siendo desenfrenados. El informe de derechos humanos 2015 del Departamento de Estado de los EE. UU. enumeró algunos de los problemas en Colombia como homicidios políticos ilegales; el enjuiciamiento lento de las ejecuciones extrajudiciales; violencia contra mujeres y niñas; tráfico de personas; y trabajo infantil.

Los sindicalistas se encuentran entre los principales objetivos de hostigamiento y amenazas de muerte y asesinatos. Recientemente, Colombia fue superada por Guatemala como el país más mortífero del mundo para los miembros del sindicato, según la Confederación Sindical Internacional. Miles de sindicalistas han sido asesinados desde la década de 1980. Sin embargo, solo un pequeño número de estos asesinatos han sido procesados.

Al tratar de poner fin a la violencia sistémica contra los miembros del sindicato y los abusos persistentes de los empleadores, los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos en 2011 firmaron el Plan de Acción Laboral. Al restringir la subcontratación y tercerización de los empleadores, el plan intenta abordar los mayores obstáculos que enfrentan los trabajadores para lograr sus derechos en el trabajo y salir de la pobreza.

Sin embargo, la violencia contra los trabajadores colombianos continúa y los trabajadores, la mayoría de los cuales no tienen pleno conocimiento de sus derechos, aún enfrentan abusos persistentes por parte de los empleadores. El Centro de Solidaridad se une a los trabajadores y sus sindicatos para exigir contrataciones directas y formales proporcionadas por el Plan de Acción Laboral y proporciona apoyo práctico a través de capacitación y asistencia legal para trabajadores en áreas como aceite de palma, petróleo, azúcar, puertos y el público sector.

Más del 27 por ciento de los colombianos vivía en la pobreza en 2015 y Colombia tiene uno de los niveles más altos de desigualdad social en la región. Los afrocolombianos son mucho más propensos que otros trabajadores colombianos a ganar menos del salario mínimo y comprenden más del 50 por ciento de los pobres del país, aunque representan una cuarta parte de la población de Colombia.

En 2012, el Centro de Solidaridad se unió a sindicatos y grupos comunitarios para apoyar la formación del Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF), la primera organización nacional que aborda explícitamente las condiciones laborales de explotación que sufren la mayoría de los afrodescendientes. Desde su lanzamiento, CLAF se ha expandido para incluir 10 capítulos locales en Colombia, y junto con el Centro de Solidaridad, está brindando apoyo para un esfuerzo de organización nacional entre las trabajadoras domésticas.

Además, el Centro de Solidaridad está trabajando con mujeres del sector público en cuatro ciudades para desarrollar habilidades claves de liderazgo, aumentar la participación en sus sindicatos y terminar con la subcontratación y la subcontratación, que a menudo reemplaza los contratos formales de empleo en el sector público y privado.